

Reconfiguraciones de la violencia urbana en Venezuela

Reconfigurations of Urban Violence in Venezuela

Carlos Meléndez Pereira

Licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Observatorio Venezolano de Violencia y director del Observatorio de Universidades, Venezuela
Carlos.melendez@ucla.edu.ve
<https://orcid.org/0000-0003-0772-4426>

Yelena Salazar

Licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Fundación Laboratorio de Desarrollo Humano y coordinadora nacional del Observatorio de Universidades, Venezuela
yelenasalarazar@ucla.edu.ve
<https://orcid.org/0000-0001-5755-2701>

Cómo citar: Meléndez, C., Salazar, Y. (2025). Reconfiguraciones de la violencia urbana en Venezuela. *Mujer Andina*, 4(1), 93-107. <https://doi.org/10.36881/ma.v4i1.1153>

Mujer Andina, Julio - Diciembre 2025, Vol. 4(1)

Resumen

En este estudio se analiza la dinámica de la violencia urbana en el área metropolitana de Barquisimeto, estado Lara (Venezuela), y sus implicaciones para el ejercicio de las libertades y la calidad de vida entre los años 2018 y 2024. La investigación adoptó un enfoque mixto con triangulación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los datos cuantitativos, provenientes del Observatorio de Prensa (OP) del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Lara, registran el tipo de delitos, su localización, los perfiles de las víctimas y victimarios, así como la frecuencia y temporalidad de los sucesos. Los datos cualitativos se obtuvieron a través de 10 entrevistas semiestructuradas y un grupo focal con líderes comunitarios de sectores populares, realizados entre 2018 y 2024. Los hallazgos revelan una disminución en las muertes violentas desde los años previos a la pandemia por COVID-19, el involucramiento de menores en la vida delictiva y un incremento en los robos de bienes esenciales, como bolsas de comida, bombonas de gas e infraestructura de telecomunicaciones. Asimismo, se evidencia un aumento de la violencia institucional manifestada formas de criminalidad a través de ejecuciones extrajudiciales y extorsión policial. Se concluye que la violencia urbana en Barquisimeto se ha reconfigurado hacia formas más difusas y cotidianas. Esta violencia afecta principalmente a los sectores populares, donde la coerción estatal se ha endurecido, coexistiendo con una pobreza cada vez más estructural que dificulta el logro de una vida digna.



Autor de correspondencia
Carlos Meléndez Pereira

Sin conflicto de interés

Recibido: 01/10/2025
Revisado: 05/11/2025
Aceptado: 10/11/2025
Publicado: 30/11/2025

Palabras clave: violencia, homicidios, instituciones, Estado, crisis.

Abstract

This study analyzes the dynamics of urban violence in the metropolitan area of Barquisimeto, Lara state (Venezuela), and its implications for the exercise of freedoms and quality of life between the years 2018 and 2024. The research adopts a mixed approach with triangulation of qualitative and quantitative methods. Quantitative data, from the Press Observatory (OP) of the Venezuelan Observatory of Violence in the state of Lara, record the type of crimes, their location, the profiles of victims and perpetrators, as well as the frequency of the events. Qualitative data were obtained through ten semi-structured interviews and a focus group with community leaders from popular sectors, conducted between 2018 and 2024. The findings reveal a decrease in violent deaths since the years prior to the COVID-19 pandemic, the involvement of minors in criminal life and an increase in thefts of essential goods, such as food bags, gas cylinders and telecommunications infrastructure. Likewise, there is evidence of an increase in institutional violence manifested forms of crime through extra-judicial and extrajudicial executions. It is concluded that urban violence in Barquisimeto has been reconfigured towards more diffuse and everyday forms. This violence mainly affects the popular sectors, where state coercion has hardened, coexisting with an increasingly structural poverty that makes it difficult to achieve a dignified life.

Keywords: violence, homicides, institutions, State, crisis.

Introducción

En el nuevo milenio en Venezuela, la combinación de pobreza y victimización de la violencia han creado las condiciones de una vida que no tiene calidad (Briceño-León & Camardiel, 2015b). Las tasas de homicidios en el país, mantuvieron un comportamiento ascendente llegando a exceder en mucho el comportamiento regional y mundial (Ávila, 2017) e igualando a Venezuela con países con tradiciones de guerras civiles y presencia permanente de organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico.

No obstante, a partir de 2017 las consecuencias sociales de la denominada crisis humanitaria compleja (CHC) comenzó a impactar la tendencia en ascenso de la criminalidad. La (des)especialización de la vida urbana, la salida de circulación de gran parte del transporte en las ciudades donde se concentraba el delito, la falta de renta y de la moneda local como medio de intercambio, así como los procesos migratorios masivos de la juventud venezolana generaron cambios

sociales que en pandemia se acelerarían. Es decir, mientras que nuestra pobreza y desigualdad pasó de ser la de un país en vías de desarrollo a la de una nación con necesidades humanitarias, las formas del crimen violento se transformaron.

Como en el resto del país, la delincuencia se ha adaptado a las nuevas condiciones socioeconómicas y políticas del estado Lara, al centroccidente de Venezuela. La ciudad de Barquisimeto, padeció los embates de la Crisis Humanitaria Compleja (CHC), donde se afectó de manera directa los medios de vida, el deterioro progresivo del salario y aspectos vitales como, la adquisición de insumos médicos y medicamentos.

En el tema educativo la tasa de asistencia a un centro de educación para los jóvenes de 18 a 24 años de Lara es de 16.6% (ENCOVI, 2021). Adicionalmente, los servicios públicos sufren un profundo deterioro; en el caso del gas doméstico ha sido uno de los más precarios durante todo este

periodo. En 10 años hubo una inversión en la cifra total de los hogares que cocinan con bombonas. En el 2011, 9 de cada 10 hogares en la entidad preparaban sus alimentos con gas, en el 2021, 9 de cada 10 hogares no cuentan con el servicio de forma frecuente (Ladeshu, 2025). Los precios de los cilindros superan los regulados por el Gobierno, y se agudizó la situación entre los años 2018 y 2022 debido a que este tipo de bienes eran buscados por el hampa. En cuanto al acceso al gas doméstico, en las zonas más populares, se ha normalizado la venta a través de organizaciones comunitarias cooptadas por el gobierno y que usan esto como mecanismo de control social.

La escasez del servicio de gasolina, que comenzó a profundizarse en 2018, se extendió hasta el tercer trimestre del año 2021. En 2024, surtir gasolina con normalidad en Barquisimeto, Carora o Quibor (tres de las principales ciudades del estado) se podía hacer solo en aquellas estaciones donde el precio es de USD 0.5 por litro. La irregularidad del funcionamiento del servicio de gasolina persiste, sobre todo en el interior del país, aunque no es tan marcado como en el año 2018 (PNUD, 2024).

Es una crisis humanitaria que ha estado persistiendo, incluso aún podemos observar que en el Plan de Respuesta 2024-2025 publicado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas, se siguen desarrollando proyectos dirigidos a la protección de poblaciones vulnerables y a la provisión de servicios básicos (OCHA, 2025). El deterioro progresivo de la calidad de vida, la precarización de los salarios y principalmente la pérdida de institucionalidad para dar respuestas a las necesidades de la población, son condiciones para la expresión de la violencia en Venezuela.

Los resultados de esta investigación responden al objetivo de conocer la dinámica de la violencia urbana en el área metropolitana de Barquisimeto en el estado Lara, durante los años 2018 y 2024, acotando aspectos vinculados a las relaciones entorno a la violencia delincuencia y sus implicaciones para el desarrollo de libertades humanas y calidad de vida; enfatizando en las manifesta-

ciones de la violencia y su vinculación con la crisis política-institucional y económica del estado Lara.

Luego de explicar el diseño metodológico que permitió obtener los resultados, se reflexiona sobre los cambios sociales de la violencia urbana. Finalmente, se exponen algunas conclusiones.

Metodología

Para explicar las manifestaciones y la dinámica de la violencia urbana en la ciudad de Barquisimeto, se recurrió a la metodología mixta utilizando la triangulación de métodos, con la finalidad de interpretar datos de procedencia cuantitativa y cualitativa. Particularmente, se utilizaron datos cuantitativos secundarios tomados de los informes publicados por el Observatorio de Violencia, capítulo Lara, durante los años 2018 al 2023. Del mismo modo, se recabó información cualitativa producto de entrevistas semiestructuradas realizadas a 10 personas que tienen roles de liderazgo en distintas zonas populares de la ciudad y una entrevista grupal con 10 mujeres que viven en barrios de las mismas parroquias. Para seleccionar a los participantes de las entrevistas y del grupo focal se usaron los siguientes criterios: que vivieran en parroquias donde se haya registrado mediana o alta incidencia de violencia, según el Observatorio de Prensa, que sean mayores de edad y que ejerzan alguna actividad de liderazgo comunitario.

La integración de métodos sugiere dos vías para aproximarse a un mismo fenómeno, sin la necesidad que uno anteponga y/o yuxtaponga sobre el otro. Los datos del Observatorio de Prensa del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Lara, no pretenden definir una población para profundizar al respecto. Así como tampoco, las entrevistas semiestructuradas y grupales no aspiran realizar la inferencia causal para luego examinar su posibilidad de generalización, puesto que “más allá de las diferencias de las lógicas causales entre la tradición cuantitativa y la cualitativa, ambas pueden compartir el enfoque de los resultados potenciales” (Sánchez, Suárez, 2020 p.140).

En relación al componente cuantitativo, se trabajó con los datos del Observatorio de Prensa del Observatorio Venezolano de Violencia, de aquí en adelante llamado OP, con el que se sistematiza y codifican noticias de hechos violentos y que son publicadas en medios impresos y digitales del estado Lara. Luego son desagregados de la siguiente manera: tipo de violencia (homicidio, robo, muertes por intervención policial etc.), localización geográfica, perfil de las víctimas y victimarios y finalmente, frecuencia y temporalidad de los eventos. Esta información permitió identificar los tipos de delitos que ocurren con mayor frecuencia, victimarios la ejecutan y las comunidades donde hay mayor incidencia; lo cual nos orientó para la consecución de información cualitativa.

En relación los datos cualitativos, se obtuvieron de entrevistas semiestructuradas y un grupo focal realizadas a 10 actores clave residentes de zonas donde hay alta incidencia delictiva, en dos momentos (2018 y 2024), quienes son principalmente líderes comunitarios y docentes que tienen tiempo viviendo en las localidades. En el primer momento se indagó sobre manifestaciones de la violencia, roles de las organizaciones comu-

nitarias y aspectos relacionados con la privación de libertades. Y en 2024 se recolectó información cualitativa, con los testimonios de las entrevistas identificando los cambios de la violencia.

Manifestaciones y cambios de la violencia

Los cambios que experimentaron las sociedades latinoamericanas durante el Covid-19 influyeron en dinámica de la violencia. “En el continente latinoamericano, el panorama producido por la pandemia transitó, en los primeros meses, por severos confinamientos y altas medidas restrictivas a la movilidad y comercio, que supusieron un descenso en la criminalidad regional” (Ríos y Niño, 2021 p.97). La drástica disminución de la interacción humana en los espacios urbanos, los cierres de fronteras, la masiva presencia de funcionarios policiales y militares para garantizar el cumplimiento del confinamiento, afectaron, por ejemplo, al narcotráfico, la delincuencia en las ciudades, el homicidio, entre otros de los crímenes más comunes de los que la región es víctima.

En el estado Lara, estos cambios fueron percibidos como la profundización de condiciones pre-

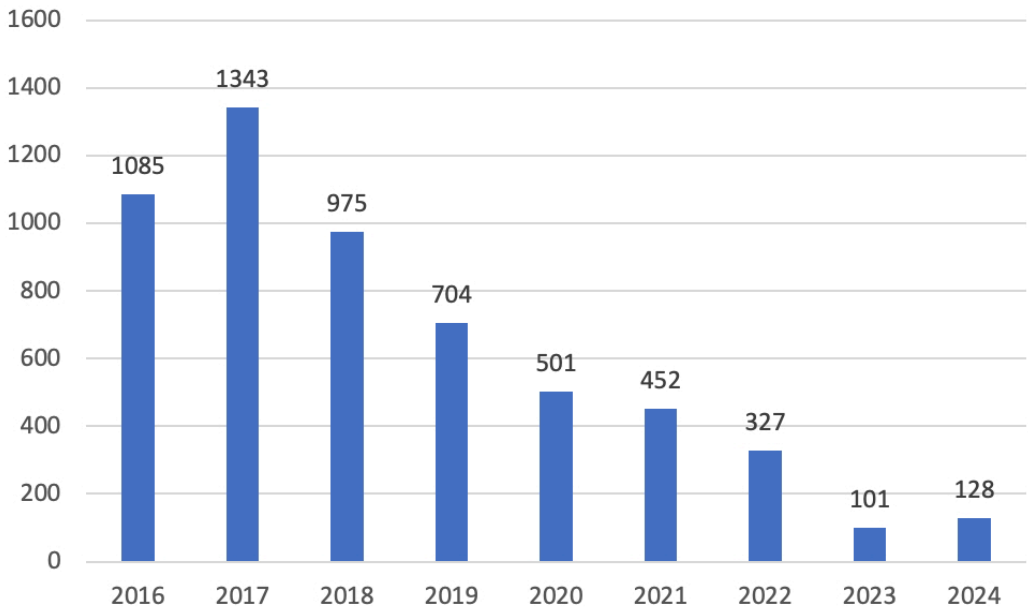


Gráfico 1. Número de noticias de violencia interpersonal analizadas entre 2018 2024

existentes. La tasa de muertes violentas para 2018, había sido 51 por cada 100.000 habitantes, una disminución de un punto porcentual en relación al año 2017. Pero en 2019 con 34 por cada 100.00 habitantes, la tasa presentó una reducción de 17 puntos (OVV, 2020).

El empobrecimiento acrecentado desde 2013 (Encovi, 2014) supuso un fuerte impacto en las transformaciones de algunos tipos y formas del crimen. Disminuyó unos, agudizó otros y amplió la manera de percibir lo violento entre los ciudadanos. Por ejemplo, ahora la pobreza también se comenzó a percibir no solo como padecimiento, sino como una condición de privación a la que se está sometido bajo mecanismos de coacción.

Es decir, el empobrecimiento estructural se sentirá como una forma de violencia (Galtung, 2016), ya que los satisfactores que permiten cumplir con nuestras necesidades han sido monopolizados progresivamente por el gobierno a través de las organizaciones comunitarias que responden directamente al ejecutivo, quienes a su vez distribuyen bolsas de alimentos y el servicio de gas doméstico de forma discrecional, sin respeto a la condición de sujetos de derechos y operativamente canalizados, en algunos casos, con instituciones militarizadas y/o parte de los grupos paraestatales denominados colectivos, que se comenzaron a conformar desde principios de siglo, bajo la premisa del poder cívico-militar (Meléndez, 2023a).

También desde 2018, creció el abuso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Además de las muertes por “resistencia a la autoridad”, las protestas populares por derechos económicos y sociales fueron reprimidas con violencia, contribuyendo el Estado directamente con el alza de los homicidios a través de uno de sus mecanismos violentos, que terminado en la consolidación de “actitudes autoritarias que postergan el respeto por las libertades civiles y los derechos humanos, en un afán de privilegiar el orden (Cruz, 2000 p.140).

Desde los sucesos del sector Valle Dorado en el

oeste de Barquisimeto en octubre, hasta la represión a ciudadanos en Pavia (municipio Iribarren) en el mes de diciembre del mismo 2018, se observó la actuación desproporcionada de los cuerpos de seguridad frente a jóvenes, hombres y mujeres que decidieron reclamar sus derechos por la carencia de servicios públicos. Una característica inédita en el trato a la protesta popular por la exigencia de derechos sociales en la entidad, ya que hasta el momento la represión excesiva había estado direccionada hacia las protestas por la reivindicación de derechos civiles y políticos en los sectores medios de la entidad.

Durante el periodo analizado en esta investigación, también se registró el mayor número de muertes por violencia policial en la historia reciente. De 2016 al 2017 por medio del Observatorio de Prensa del Observatorio Venezolano de Prensa (OVV) capítulo Lara, en lo sucesivo OP, se identificó un aumento de los asesinatos por “resistencia a la autoridad” de más del 30%. Entre estos dos años de 7.6% del total de los registros procesados pasó a 11.4%. En 2018 los casos de resistencia a la autoridad representaron el 14.6% del total, es decir, un aumento de 20% en relación a 2017 y más de 45% en relación a 2016. La presencia de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) a partir del mes de julio del año mencionado marcó un antes y un después con respecto a personas asesinadas por policías. De 2019 a 2021 las tasas de muertes por resistencia a la autoridad serán mayores que la tasa de homicidios (OVV, 2021).

La crisis de movilidad urbana y extraurbana, la permanencia en casa, las condiciones de vulnerabilidad humanitarias que existían en Venezuela, previas a la crisis por la pandemia, también se expresaron directamente en cambios en la violencia intrafamiliar que durante la pandemia se hicieron más comunes y a su vez más difundidas por los medios de comunicación. A continuación, se profundiza en los cambios percibidos en las distintas formas de violencia interpersonal en el estado.

Cambios en la violencia delictiva

En el periodo de estudio, según los líderes y lideresas entrevistadas para esta investigación, hay al menos tres cambios en las formas de la violencia delictiva en los barrios de la ciudad de Barquisimeto. La primera, tiene que ver con la disminución de los homicidios, la segunda con la incorporación de niños en organizaciones dedicadas al microtráfico de drogas, y la tercera con el aumento de los delitos contra la propiedad. De los robos de bienes suntuosos y hurtos en viviendas de sectores medios se pasa a los robos y hurtos dentro de las casas en sectores populares; robos de bolsas de comida, bombonas de gas, tanques de agua, otros bienes de la vivienda y de la infraestructura de telecomunicaciones, propiedad de empresas públicas y privadas.

Reducción del homicidio

En relación a la disminución de los homicidios, identificamos en el OP una reducción del 98.76% entre 2018 y 2022. De 2018 a 2019 la reducción porcentual fue de 39.7% y de 2020 a 2021 fue de 50.16%. La tendencia a la baja, como se puede observar, ya había comenzado antes del covid-19.

El estado Lara no ha figurado en la lista de las entidades federales que poseen las mayores tasas

de muertes violentas en el país durante el periodo de estudio. En 2022 terminó como el estado con la menor tasa de muertes violentas, y entre el 2021 y 2018 estuvo entre los puestos 19 y 21 de los 23 estados y el Distrito Capital que en conjunto conforman la división política territorial de Venezuela.

Tabla 1. Posición nacional del estado Lara según las tasas de homicidios

2018	2019	2020	2021	2022
20	22	21	19	24

Pero el municipio Iribarren, capital del estado, sí había figurado en el ranking de los municipios con mayor número de asesinatos.

Tabla 2. Posición del municipio Iribarren entre los municipios con más muertes violentas

2019	2021	2022
8	7	27

En el municipio Iribarren, se concentra el 56% del total de la población del estado que cubre una superficie de 19.800 Km² (INE, 2012), así como también se ha concentrado más del 60% de las

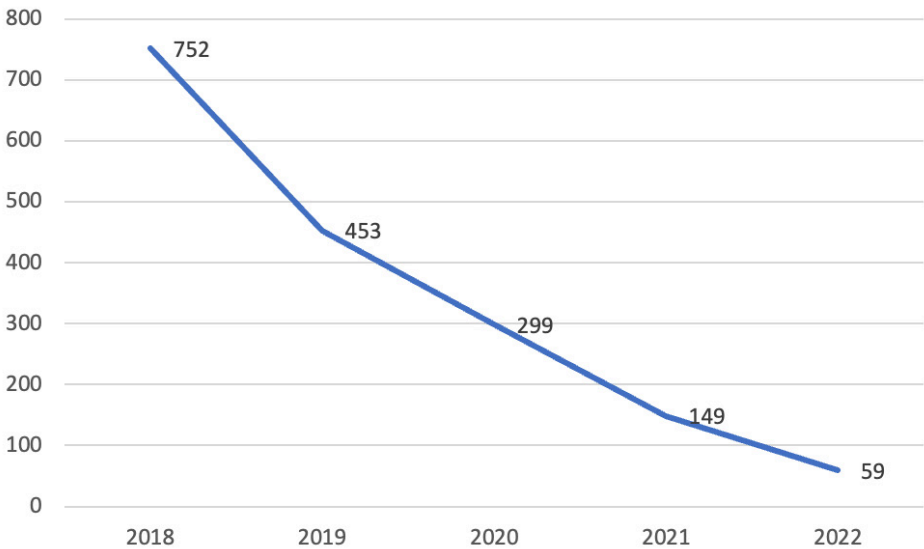


Gráfico 2. Número de muertes violentas registradas en el Observatorio de Prensa 2018-2022

muertes violentas registradas en todo el estado, al menos desde el 2018 al 2022 (OVV, 2022).

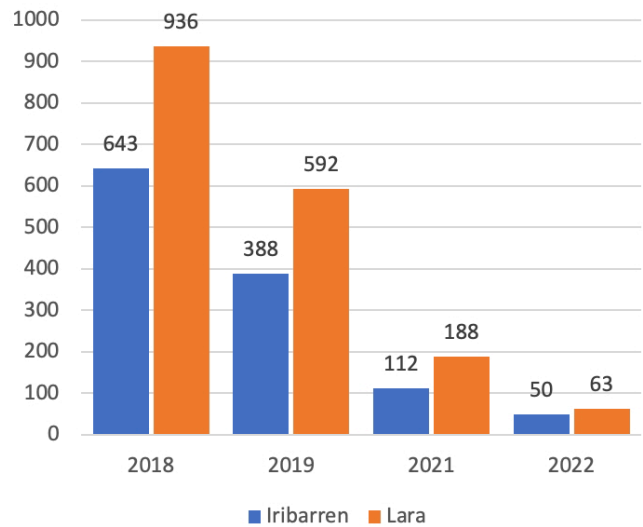


Gráfico 3.
Número de muertes violentas en Lara e Iribarren 2018-2019-2021-2022

La concentración de la dinámica urbana en parte de su territorio con las propias características de desigualdad y densidad población que definen a las ciudades latinoamericanas, hizo posible esta realidad. Como se puede observar en el siguiente gráfico comparativo entre el estado y el municipio con la parroquia más desigual de la entidad, existe una importante concentración de las muertes violentas en la parroquia Ana Soto, la de mayor densidad y desigualdad en el estado.

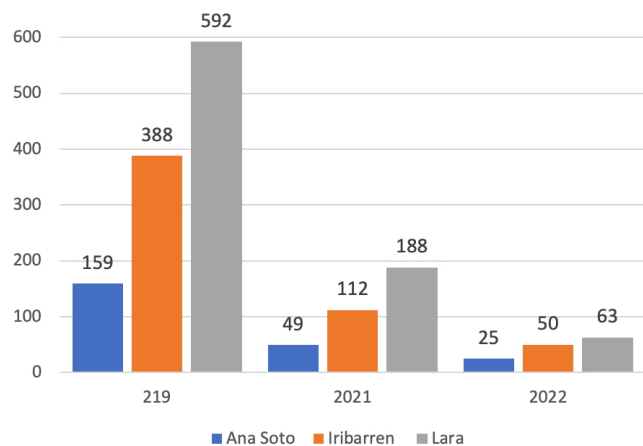


Gráfico 4.
Número de muertes violentas en la parroquia Ana Soto, municipio Iribarren y el estado Lara (2019-2021-2022)

En relación a la dimensión macrosocial, las desigualdades persistirán; se ampliarán entre los extremos, pero se resignificarán entre la mayoría de menor ingreso, producto, sobre todo, de la estancación vivida desde 2017. La escasez de alimentos, medicinas, la falta de ingresos, así como el colapso de los servicios públicos igualó a los habitantes de la entidad hacia abajo. En un lapso de cinco años hubo un empobrecimiento intracase entre los sectores populares y medios del país.

En los barrios comenzó a disminuir la circulación de dinero en efectivo. Además, la falta de combustible reducía la posibilidad de utilizar las motos y carros con los que tradicionalmente se cometían los delitos, dentro de las parroquias donde tradicionalmente había más robos.

Por tanto, el Índice de Gini nacional que mostraba una importante reducción en los primeros 12 años del siglo, versus la creciente tasa de homicidios que desde la llegada del nuevo siglo tendió a aumentar, debía verse con otro enfoque. Dado que la disminución nacional, no era generalizada. Con lo cual aparecían familias, dentro de los sectores donde tradicionalmente había más criminalidad, que habían podido mejorar sus condiciones de vida, con las políticas redistributivas aplicadas desde comienzos de siglo, pero “emergen notables diferencias entre aquellos sectores que han logrado mayores niveles de inclusión, a partir de su entrada en la economía formal o el acceso a redes institucionales asistenciales, y aquellos grupos e individuos que han quedado rezagados” (Antillano, 2016 p.47).

La diferencia entre la empleabilidad de los jóvenes con los adultos se observa como otra expresión de estas especificidades de inequidades entre grupos sociales, mientras que los más adultos pudieron acceder a mejores fuentes de empleo, los jóvenes no encontrarán las mismas oportunidades en una situación de aumento de ingresos y mejoras importantes de otros grupos poblacionales. (Antillano, 2016) Por lo que, el crimen en la primera y parte de la segunda década del siglo XXI se había expandido.

Pero a partir de 2015, lo urbano, en el sentido de la diferenciación utilizada por las teorías de la modernización (Germani, Dos Santos, 1969), se transformaría. Tanto por la migración como por el empobrecimiento, las condiciones mesosociales (Briceño-León, 2007) se modificarán. La ecología de la densidad poblacional dejó de ser una razón de conflicto, y por muy efectiva que fuera la arquitectura de la urbanidad pobre para el crimen, con tanto empobrecimiento y con la salida de cientos de miles de jóvenes de la ciudad, la violencia iba a cambiar.

Una de las entrevistadas indicó, al consultarsele sobre los cambios de la violencia en la comunidad de La Carucieña (E5, entrevista personal, 17 de noviembre de 2018) “Horita ya no se oye ningún tiro porque no hay malandros se fueron todos para Colombia y otros andan para Perú”. Los jóvenes durante la crisis no encontrarán ninguna salida al cumplimiento de sus aspiraciones en el barrio, ni siquiera a través del crimen, por lo tanto, buscarán en la migración la vía más expedita de continuar con sus vidas. En un contexto, donde las desigualdades las comenzará a determinar el acceso a la alimentación o no, la delincuencia tomará otras características.

Por tanto, el homicidio con intención de robo se redujo, y con el la cantidad de asesinatos que ocurrían en los barrios pobres del municipio Iribarren, o en las calles y avenidas de los centros urbano de la ciudad, esto se puede reforzar con información del OP. (OVV, 2020).

La desarticulación de pandillas producto de la migración se entenderá como otro factor generador de la reducción de homicidios, comenta una lideresa comunitaria (E2, entrevista personal, 13 de noviembre del 2018) “a diario aquí retiraban hasta tres cuerpos, las bandas estaban más peligrosas en esos días horita dicen que la mayoría de los muchachos se han ido para Colombia” situación que se vive en Lomas de León en el oeste de Barquisimeto.

La violencia letal había tenido hasta ahora como víctimas y victimarios a los hombres jóvenes de

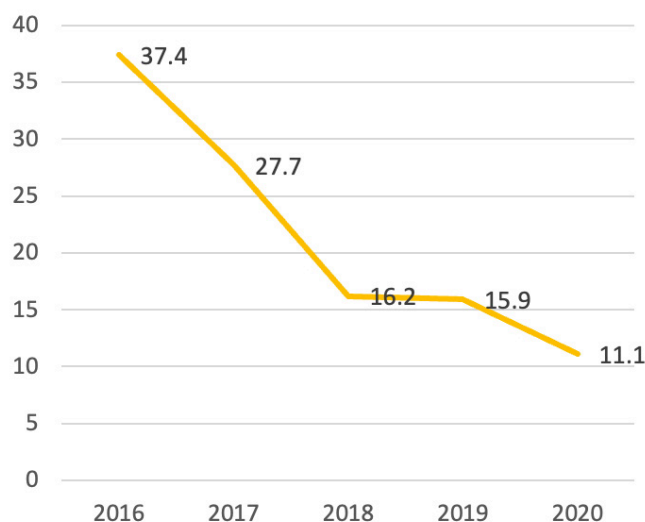


Gráfico 5.

Porcentaje de tipo de violencia delictual registradas en el Observatorio de Prensa 2016-2020

los barrios pobres de la ciudad. Ante esta realidad organizativa del crimen, hubo una absorción centralizada del crimen en las mafias. Entendidas las primeras como un tipo de organización dedicada al robo y extorsión, y la segunda como un tipo organizativo de mayor nivel dedicado a la oferta de protección a personas y empresas (Briceño-León, 2015a).

Los enfrentamientos en los barrios populares del oeste y el norte de Barquisimeto, se producían en mayor medida entre las pandillas conformadas por jóvenes de entre 15 y 29 años quienes desde 2015 comenzaron a ser afectados por la migración forzada. “Según la primera medición de la emigración internacional reportada por los hogares encuestados en la ENCOVI 2017 se estimó que prácticamente 3 de cada 5 tenían edades entre 15 y 29 años” (Acnur, Ucab, 2024).

El mercado de las armas de fuego y municiones, y aquí un cambio fundamental en la esfera microsocial, también se van a ver afectadas. La depresión del delito afectó la oferta de municiones y armas. Dentro de los delitos registrados por prensa se comenzó a percibir un mayor uso de armas blancas y/o objetos contundentes. Este cambio será transcendental en la disminución de las víctimas fatales.

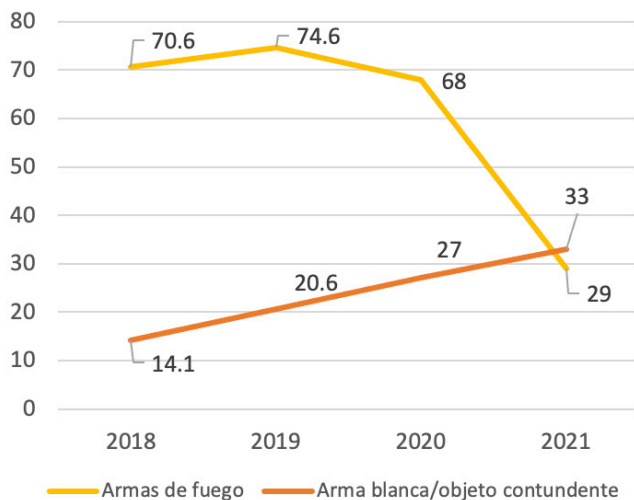


Gráfico 6.
Porcentaje de tipo de violencia delictiva registradas en el Observatorio de Prensa 2016-2020

Cambios en la delincuencia urbana

Existen otros cambios en la esfera de la delincuencia urbana. Aunque el robo por hambre ya comenzaba a identificarse desde 2015 (OVV, 2016) continuó hasta en los años de pandemia con el robo dentro de las casas y en las calles de sectores populares. Una joven lideresa comenta (E6, entrevista personal, 21 de noviembre de 2018) “El robo de cables por ejemplo aquí la misma comunidad tuvimos que ponerle botellas a todos los cables y con esas botellas ya tenemos una manera de controlar porque se habían robado los cables de internet no teníamos y volvimos a hacer todos de nuevo porque CANTV nos dijo resuelvan de una manera y tuvimos que comprarlos”, situación que se vive al suroeste de Barquisimeto.

La inflación y la escasez, que ya estaban antes del Covid-19, aceleró el robo y hurto en las casas. Mientras se registró un descenso en el robo en el transporte público, por la misma disminución de la actividad peatonal, la gente confinada en sus casas durante los años de pandemia, siguió siendo presa del crimen.

El robo y hurto famélico entendido como la sustracción de productos de primera necesidad empleando o no la fuerza física, se generó sin que hubiera una política preventiva. (E2, entrevista

persona, 13 de noviembre de 2018) A una señora en el mercado le robaron 2 kilos de pollo que traía en estos días, informa otra de las entrevistadas para esta investigación.

Luego del reacomodo del crimen durante el 2020, la fluctuación del delito dependía en 2021 del aumento de la fluidez económica en determinados meses y de la movilidad del nuevo criminal que existe en las ciudades de Venezuela que se desplaza dentro y fuera del territorio nacional.

Según los datos registrados en el OP a partir del último trimestre de 2021 hubo un aumento significativo del robo y del homicidio por aprovechamiento ilícito. En el décimo mes 29% de lo registrado estuvo vinculado a la delincuencia organizada y el 100% de los homicidios fueron con intención de robo. Mientras que en enero 4 de cada 10 homicidios fueron por robo y 17% de lo delictivo estuvo vinculado a la delincuencia organizada (OVV, 2021).

Otro ejemplo significativo de la correlación entre el crecimiento y fluidez de la actividad económica y el aumento del crimen se observa en los robos a los medios de transporte. Durante el segundo semestre de 2021 los transportistas de Barquisimeto metropolitano comenzaron a denunciar el aumento de los robos a las unidades, mientras que los primeros meses del año fue más común conocer por medio de la prensa local los robos de bicicletas.

Además del padecimiento de la violencia estructural de los adultos mayores por la desatención en salud, la crisis de los servicios públicos, la pobreza extrema por ingreso y las penurias que tienen que vivir para la obtención de algún beneficio público, en el estado Lara, durante los años de estudio fueron alarmantes los hechos letales en contra de adultos mayores. Si bien, representaron el 10% de la totalidad de las víctimas de los hechos violentos registrados en el OP, la alta letalidad, evidenció una realidad trágica (OVV, 2021b).

Esta práctica encierra un conjunto de variables; una de ellas son las propias consecuencias de la Crisis Humanitaria Compleja. La migración

forzada de los venezolanos que ha generado una transformación de la estructura familiar en el país. Otra variable a considerar para explicar este fenómeno, deviene del incremento de los robos y hurtos en las casas. Ese delito del que han sido víctimas las personas mayores es tipificado como homicidio con intención de robo.

Reclutamiento de niños y adolescentes para el microtráfico de drogas

El control de las mafias ha generado otros problemas para la permanencia de los factores que hacen sostenible al crimen. Las entrevistadas perciben a partir de 2018, mayor incorporación de niños dentro las organizaciones dedicadas al microtráfico de drogas. (E3, entrevista personal, 15 de noviembre de 2018) “hay gente que vende la droga bajo cuerda se ven los niños desde pequeños vendiendo y consumiendo la droga, los adultos incitan a los niños desde pequeños a consumir la droga para luego vendérselas...”.

Entre las causas más relevantes que identifican las representantes de las organizaciones comunitarias están: el abandono escolar, el hambre y la ausencia de padres que se vieron forzados a migrar. (E1, entrevista personal, 10 de noviembre de 2018) “Muchos jóvenes han dejado de estudiar por la violencia, jóvenes que no viven con su familia, sino que viven es con la abuela y como estos jóvenes han caído en drogas, como chicas se están prostituyendo”.

De igual forma, durante los años de pandemia se observó mayor actividad relacionada con el tráfico, consumo y micro cultivo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Además de ser un corredor de paso para la droga, se identificaron pequeños sembradíos de marihuana y la detención en mayor medida de personas dedicadas al microtráfico de drogas.

En las zonas agrícolas de los municipios Iribarren, Crespo, Palavecino y Torres destinadas al cultivo de café, maíz o plátanos, apareció la siembra de marihuana. Tal como se expresa en el Informe Mundial de Drogas de la Oficina de Naciones

Unidas con la Droga y el Delito, la situación de la pandemia y el empobrecimiento de las personas contribuyeron al cultivo de plantas ilegales. “La crisis de la COVID-19 ha empujado a más de 100 millones de personas a la pobreza extrema y ha exacerbado enormemente el desempleo y las desigualdades, ya que el mundo perdió 255 millones de empleos en 2020” (UNODC, 2025).

Cambios en la violencia policial

La respuesta que le había dado el gobierno de Hugo Chávez a la exacerbada mortalidad violenta experimentada durante sus años de gobierno había sido, lo que denominan punitivismo carcelario, operativizado a partir de 2009 por medio de “invasiones masivas a barrios y en la detención de jóvenes varones pobres... Bajo el punitivismo carcelario se pudo advertir el intenso incremento de la población penitenciaria en un corto periodo: el número de encarcelados pasó de 30.483 a 50.000 entre 2009 y 2011” (Zubillaga y Hanson, 2018, p. 61).

Pero, desde 2015 en la ciudad de Barquisimeto las Operaciones de Liberación del Pueblo, conocidas como OLP, durante el primer gobierno de Nicolás Maduro, inauguraran otro momento de las políticas gubernamentales frente a la criminalidad. Esta política, se transformaría en lo que las mismas autoras llaman matanza criminal, y en esta entidad de centrooccidente se vivirá con más ahínco entre los años 2018 hasta 2021.

Describe una de las entrevistadas sobre las realidades que en 2018 eran más comunes entre las relaciones de violencia que existían en los barrios populares de Barquisimeto. (E1, entrevista personal, 10 de noviembre de 2018) “Ahorita están son los que se encapuchan los del FAES esos son los que están de servicio... por eso es que los muchachos les tienen tanto miedo porque esos están ahí es para matar”.

El ascenso de las ejecuciones extrajudiciales comenzó con la llegada de las FAES en 2018 hasta su temporal disminución en 2020 luego de las exigencias hechas por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

En este período, la intervención policial fue letal con manifestaciones de crueldad y saña. Durante estos años este cuerpo especial perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana, ejecutaría la gran mayoría de los asesinatos y estarían involucrados en los sucesos violentos analizados.

Aunque durante los años de pandemia las muertes masivas por resistencia a la autoridad disminuyeron, fueron superiores a las cometidas por otras causas. El 54% de las víctimas fatales fallecieron a mano de la policía. Todas las muertes reportadas fueron “justificadas” desde el discurso oficial como “resistencia a la autoridad”. El parte oficial de los funcionarios describe procedimientos que se apegan a la ley, pero las versiones de los familiares describen los patrones que se institucionalizaron en los procedimientos policiales de los últimos tres años: sometimiento, agresiones, violación al domicilio, tortura, robos y posterior ejecución (Meléndez y Salazar, 2022). Se trata de una reclasificación de los procedimientos para encajarlos en otros subtipos penales, como suele suceder en el caso de las torturas encajado en el subtipo de lesiones.

Así como el homicidio intencional cometido por la delincuencia se encuentra concentrado en mayor medida en Iribarren, lo mismo ocurre con las presuntas muertes por resistencia a la autoridad. La tasa del municipio capital fue de 6.5 por cada 100.000 habitantes, es decir, 64% se ejecutaron dentro de los límites de su territorio. A nivel parroquial sucede lo mismo, de este total Ana Soto y Tamaca concentran 65%.

La capacidad del Estado para garantizar el orden público fue más violenta durante este periodo del estudio. Como sucedió en el país las OLP serán el comienzo de una política de exterminio que duró hasta 2021 amparada en un estado de excepción decretado en 2017 y que se justificaría progresivamente con la entrada de la pandemia.

En el primer año de coronavirus la policía asumió la responsabilidad de confinar a la gente. En ese año las denuncias del excesivo uso de la fuerza para concretar dicha labor fueron numerosas. Pero este año, la fiscalización del confinamiento disminuyó durante el segundo semestre por el aumento de la circulación que ya hemos

descrito. No obstante, así como el crimen se ha adaptado a dichos cambios la acción policial ilegal también lo ha hecho. Por ejemplo, a través de los medios de comunicación las asociaciones de productores, comerciantes y demás agentes económicos han denunciado la constante extorsión de la que son víctimas en las vías urbanas y extraurbanas.

También los cuerpos de seguridad se disputaron el poder con los actores armados no estatales (AANE) de las estaciones de servicio en los distintos municipios de la entidad. Por diferentes vías los usuarios informaron sobre el abuso del que eran víctimas por parte de ambos grupos, al momento de surtir de combustible. A los colec-

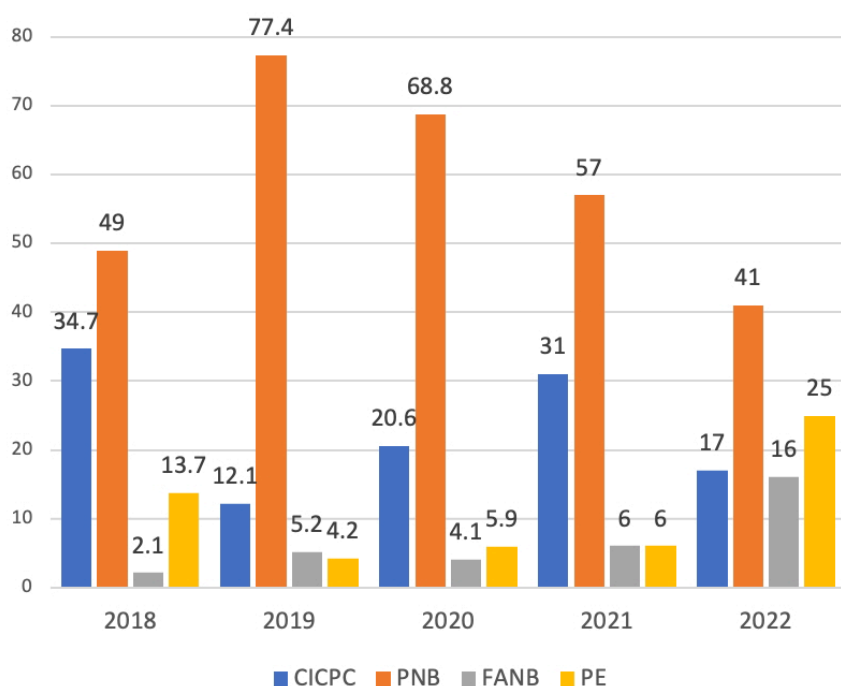


Gráfico 7. Organismo policial involucrado como victimario en el suceso (porcentaje) OP 2018-2022

tivos y funcionarios ya no se les vio reprimiendo la protesta por derechos políticos y civiles como en 2017 y 2023, se les vio en las estaciones de gasolina controlando la distribución del servicio.

La extorsión policial también llegó a los barrios pobres de Barquisimeto, previo al Covid-19. Aquellos centros de generación de renta, como bodegas, talleres mecánicos, mercados informales, entre otros, en estos sectores se hicieron vulnerables por ser víctimas de extorsión de los funcionarios policiales. El cumplimiento de la función policial, cuyo propósito es generar seguridad a la ciudadanía, sigue desdibujada, y las familias pobres son las que mayores consecuencias tienen. A la extorsión por parte de las megabandas hacia los comerciantes se le suma la de los policiales hacia los comerciantes informales (OVV, 2021a).

Estamos en presencia de hechos delictivos que aplican el mismo formato de las megabandas que extorsionan a comerciantes y vendedores de vehículos, algo ya conocido en Lara. La diferencia es que son los propios agentes de seguridad del Estado los que extorsionan en las comunidades con menos garantías de derechos y más vulnerabilidad jurídica, en especial en el municipio Iribarren, que es el más poblado de la entidad”.

Cambios en la violencia familiar

Por otra parte, en la pandemia la violencia intrafamiliar evidenció una problemática que estuvo creciendo desde el inicio de la crisis humanitaria. Factores socioeconómicos como el hambre y el desempleo y sociopolíticos como la desprotección de la familia por parte del Estado, y factores socioculturales como el machismo ha generado el brote de violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como mujeres que dejan vidas a su paso (Meléndez, 2023b) y a su vez pone en una situación de vulnerabilidad a niños para ser reclutados en organizaciones criminales y a niñas para formar parte de redes de prostitución infantil.

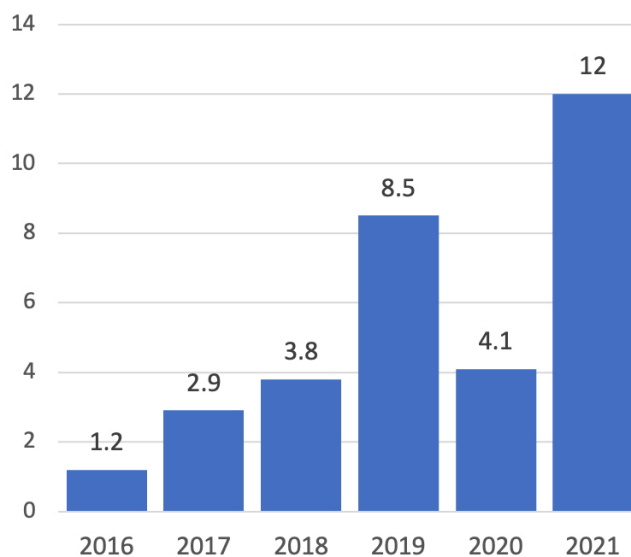


Gráfico 8.

Porcentaje de violencia intrafamiliar en el estado Lara 2016-2021

En 5 años hubo un incremento del 90% de los sucesos de violencia familiar. En 2021 8% de los homicidios tuvieron como víctimas a niños y a adolescentes. La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el estado Lara se expresó durante estos años de estudio en diferentes formas. Las inseguridades son múltiples y con diferentes intensidades de daños, según el género, la edad, la presencia de los padres en el hogar y su condición de escolarización. Dentro de la homogénea precarización de las familias pobres en los sectores urbanos de la entidad, existen inequidades en la gravedad de la violencia estructural. El aumento de la jefatura del hogar a cargo de mujeres ha provocado la sobrecarga en las labores de cuidado, y en algunos casos la menor presencia en sus casas debido a la necesidad de buscar ingresos que les permitan alimentar a sus hijas e hijos. Un contexto de vulnerabilidad caracteriza a la familia popular que se ha traducido en formas de violencia contra las poblaciones vulnerables.

La violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA), es previa a la pandemia. No obstante, en ella se aceleró su frecuencia e intensidad. La tortura, el trabajo forzoso, los abusos sexuales e inducción al suicidio figuran entre las formas de violencia física de mayor gravedad. La violencia

sufrida y extendida en NNA, incluyendo el tráfico de personas donde los NNA han sido víctimas fundamentales está generando unas secuelas físicas y psicológicas que prolongan el riesgo a mayor vulnerabilidad y violencia social. En la familia larense más pobre y desigual existen condiciones para la generación de perfiles violentos en riesgo de ser captados por el crimen organizado y mantener los indicadores de criminalidad en el mediano y largo plazo (Meléndez, 2023b).

Los niños, niñas y adolescentes, así como los jóvenes terminan sufriendo los embates de una crisis prolongada para el 2021, “no tuvieron ni siquiera la promesa de tener un futuro brillante, lo que encontraron fue un país que los sometió al abandono, al hambre, a la insalubridad, a la deserción escolar, a trabajos forzosos, a ser víctima de maltratos físicos, verbales, psicológicos y sexuales” (Castellanos, 2024, p. 247).

La respuesta en materia de prevención y protección de las instituciones del Estado son casi nulas y cuando se dan no suelen ser sostenibles y efectivas. El retardo procesal, la inexistencia de políticas sociales dirigidas a los NNA, las reparaciones inadecuadas para casos de violencia, son parte de las evidencias de la mencionada nulidad.

Conclusiones

Con el objetivo central planteado en esta investigación se buscaba conocer la dinámica de la violencia urbana en el área metropolitana de Barquisimeto del estado Lara, en Venezuela. El periodo de estudio es desde el 2018 al 2024, lo cual implica que en esa dinámica se fueron reconfigurando la manera de expresarse la violencia, afectando a distintas poblaciones y por supuesto, lo relacionado a la calidad de vida y las libertades humanas.

En este sentido, la investigación arroja que hay afectación directa de la dinámica de la violencia en la ciudad de Barquisimeto, dándose una relación bidireccional donde la violencia como expresión directa genera vulneración de libertades pero, a su vez es consecuencia de otros tipos de

violencia estructurales que tienen consecuencias directas sobre la calidad de vida de la población. En términos generales, la reconfiguración de la violencia en la ciudad se ha estado manifestando de distintas maneras en este periodo de tiempo, adicionándose problemáticas otros tipos de violencia como la institucional y la familiar.

En relación a la calidad de vida, es importante destacar que el empobrecimiento intracase provocó una reducción de las muertes violentas en el municipio Iribarren, donde se había concentrado la mayoría de este delito en la entidad, además de una adaptación al contexto que se vendría a configurar con la crisis. Las desigualdades persistirán; se ampliarán entre los extremos, pero se resignificarán entre la mayoría de menor ingreso, producto, sobre todo, de la estanflación vivida desde 2017 hasta 2021 y aunque hubo cambios en la economía durante los años posteriores hasta el 2024, no se ha alterado la estructura de pobreza y desigualdad. La migración forzada expulsó al grupo poblacional que había protagonizado la mayoría de muertes violentas, tanto como víctimas como victimarios.

La política de seguridad se montó sobre el descenso de violencia delictiva entre los años 2018-2024, tanto a través de acciones de mano dura y acciones criminales que afectan a los ciudadanos, ambas sirvieron para diluir el Estado de derecho y disuadir mediante el miedo. Las autoridades oficiales explican la reducción como si fuera parte de una política implementada y realmente es la combinación de varios factores, pero no precisamente la mano dura.

No obstante, algunos elementos estructurantes del crimen siguen vigentes en la entidad. Niños y jóvenes descolarizados, desempleados; jóvenes dentro de instituciones policiales, armados y socializándose con el crimen que se construyen en el Estado. El crimen se ha reorganizado en bandas dedicadas a las extorsiones, protección de personas y negocios, estafas digitales y microtráfico de drogas. Estas organizaciones hacen un uso más racional de la violencia. La reducción del delito como no ha sido por una política integral

no ha podido atender sus causas. Todo lo contrario, los niños y jóvenes que se socializan entre más violencia familiar, no encuentran opciones en la educación ni el trabajo.

La manifestación de la violencia se fue reconfigurando, no solo por los efectos prolongados de una crisis humanitaria que produce más población empobrecida, jóvenes migrando y un deterioro e infuncionalidad de los servicios públicos, que no solo afecta al ciudadano común sino a aquellos que viven del delito y que buscan otras modalidades de acción ante esta crisis que se vive. Además, y quizá un elemento estructurante es la creciente e innegable desinstitucionalización que en los organismos de seguridad se expresa en el poco o nulo respeto de los derechos humanos, siendo la ejecución extrajudicial un fenómeno común durante este periodo de estudio y que particularmente en el estado Lara tuvo un gran impacto y que por ende, se va configurando

como un elemento constate y presente, que afecta la calidad de vida y restringe de manera categórica las libertades y derechos de los ciudadanos.

En relación a las limitaciones que se tuvieron para este estudio, está la opacidad de cifras oficiales que no se están llevando en la región y cualquier estudio que se realice debe recurrir a información suministrada por otras fuentes que recaban información fidedigna. Es importante que, para futuras investigaciones se profundice acerca de la manera como se está expresando la violencia en los hogares venezolanos y la manera en que está afectando a las poblaciones más jóvenes.

Contribuciones de autores:

Carlos Meléndez Pereira: Escritura inicial, conceptualización, metodología, análisis de resultados, escritura final.

Yelena Salazar: Metodología, escritura inicial, escritura final.

Referencias

- Acnur, Ucab (2024). Perfil de la migración reciente reportada desde los hogares venezolanos. <https://www.acnur.org/media/perfil-de-la-migracion-reciente-reportada-desde-los-hogares-venezolanos>
- Antillano, A. (2016). Tan lejos y tan cerca: desigualdad y violencia en Venezuela. *Espacio abierto: cuaderno venezolano de sociología*, 25(1), 37-60. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/21006>
- Ávila, K. (2017). Homicidios en Venezuela: Principales Debates y Aproximaciones Explicativas (Homicides in Venezuela: Main Debates and Explanatory Approaches). *Misión Jurídica*, 10(12), 117-140. <https://doi.org/10.25058/1794600X.148>
- Briceño-León, R. (2007). Violencia urbana en América Latina: Un modelo sociológico de explicación. *Espacio Abierto*, 16(3) pp. 541-554 <https://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/1262>
- Briceño-León, R. y Camardiel, A. (2015a). *Delito organizado, mercados ilegales y democracia en Venezuela*. Editorial Alfa.
- Briceño-León, R. y Camardiel, A. (2015b). *Pobreza y violencia en Venezuela*. En Freitez, A, González M, y Zuñiga, G. *Una mirada a la situación social de la población venezolana*, (pp. 35-52). UCAB; USB; UCV; Fundación Konrad Adenauer. I
- Briceño-León, R. (2007). Violencia Urbana en América Latina: Un modelo sociológico de explicación. *Espacio Abierto*, 16(3), 541-574. <https://www.redalyc.org/pdf/122/12231607.pdf>
- Castellanos, A. (2024). Violencia contra la juventud y la niñez en Venezuela. *Revista Interacción y perspectiva, revista de trabajo social - LUZ*, 14, 244-249. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9336231>
- Cruz, J. M. (2000). Violencia, democracia y cultura política. *Nueva sociedad*, 167, 132-146. <https://nuso.org/articulo/violencia-democracia-y-cultura-politica/#:~:text=El%20problema%20de%20la%20violencia,apoyo%20a%20figuras%20pol%C3%ADticas%20autoritarias>
- ENCOVI. (2014). Encuesta de condiciones de vida en Venezuela año 2014. <https://www.proyectoencovi.com/encovi-2014>
- ENCOVI. (2021). Encuesta de condiciones de vida en Venezuela año 2021. <https://www.proyectoencovi.com/encovi-2021>
- Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. *Cuadernos de estrategia*, (183), 147-168. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797>
- Germani, G. y dos Santos, MR (1969). Etapas de la modernización en Latinoamérica. *Desarrollo Económico-Revista de Ciencias Sociales*, 9 (33), 95. <https://doi.org/10.2307/3466096>
- INE. (2012). *XIV Censo Nacional de Población y Vivienda 2011*. Instituto Nacional de Estadísticas. <https://ine.gob.ve/wp-content/uploads/2025/09/CCENSO-2011-RESULTADOS-BASICOS.pdf>
- Meléndez, C. y Salazar Y. (2022). *Lara: el miedo como política de control social*. En Briceño, R. (pp 145-171) *Tanatopolítica en Venezuela Sicariato de Estado y Derechos Humanos*. Editorial Alfa.

- Meléndez Pereira, C. (2023a). Los colectivos armados en el estado Lara: cambios y continuidades de la violencia política en el siglo XXI. *Espacio Abierto*, 32(2), 187-200. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8086814>
- Meléndez Pereira, C. (2023b). Detrás del silencio: la violencia contra la niñez y la adolescencia en el estado Lara-Venezuela durante la pandemia por Covid-19. *Revista CENIPEC*, 35, (109-130) <https://www.saber.ula.ve/handle/123456789/50475>
- OCHA. (30 de octubre de 2025). *Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas*. Plan de respuesta humanitaria 2024-2025. <https://www.unocha.org/publications/report/venezuela-bolivarian-republic/venezuela-extension-del-plan-de-respuesta-humanitaria-2024-2025>
- OVV. (2016). *Informe anual de violencia 2016*. Observatorio Venezolano de Violencia. <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/2016-ovv-estima-28-479-muertes-violentas-en-venezuela/>
- OVV. (2020). *Informe anual de violencia 2020*. Observatorio Venezolano de Violencia. <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2020-entre-las-epidemias-de-la-violencia-y-del-covid-19/>
- OVV. (2021a). *Extorsión policial en Lara: otro rostro de la violencia en pandemia 2020- 2021*. Observatorio Venezolano de Violencia. <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/extorsion-policial-en-lara-otro-rostro-de-la-violencia-en-pandemia/>
- OVV. (2021b). *Informe anual de violencia 2021*. Observatorio Venezolano de Violencia. <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2021/>
- PNUD. (2024). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desempeño Macroeconómico de Venezuela. <https://www.undp.org/es/venezuela/publicaciones/desempeno-macroeconomico-de-venezuela-4to-trimestre-2024-y-perspectivas-2025>
- Ladeshu. (4 de enero de 2025). Vulnerables y desiguales ante el acceso de gas doméstico en el estado Lara, año 2021. <https://laboratoriodesarrollohumano.com/noticias-dhemos-llevando-lena-por-gas-solo-6-de-los-hogares-en-lara-cuenta-con-servicio-permanente-de-bombonas/>
- Ríos, J. y Niño, C. (2021). Dinámicas de la Inseguridad y la violencia durante la pandemia en Colombia. *Revista Unisci*, 56, 95-115. <https://www.unisci.es/wp-content/uploads/2021/05/UNISCIDP56-6RIOS.pdf>
- Sánchez, J., y Suárez F. (2020). *Métodos mixtos: diseñando investigaciones que combinan enfoques cualitativos y cuantitativos*. Editorial Universitaria de Buenos Aires Sociedad de Economía Mixta.
- UNODC. (30 de octubre de 2025) COVID pandemic fuelling major increase in drug use worldwide: UN report. <https://news.un.org/en/story/2021/06/1094672>
- Zubillaga, V. y Hanson, R. (2018). Los operativos militarizados en la era post-Chávez. *Revista Nueva Sociedad*, 278, 59-69. <https://nuso.org/articulo/los-operativos-militarizados-en-la-era-post-chavez-del-punitivismo-carcelario-la-matanza-sistematica/>